

**La Nación** Sábado 6 de Enero de 2001

De FF.AA. y entidades religiosas sobre destino de desaparecidos

**Política**

## Informes llegaron a Lagos

La Nación / SANTIAGO

FOTOS: CARLOS QUEZADA

El Presidente Ricardo Lagos recibió ayer toda la información disponible sobre el destino de los detenidos desaparecidos que durante seis meses recopilaron las instituciones armadas y religiosas del país. Los uniformados -a través del obispo castrense Pablo Lizama- le manifestaron al Mandatario que hicieron "todo el esfuerzo necesario" para dar con el paradero de las víctimas, gesto que fue valorado por las autoridades.

A partir de las 8:30 horas, a la sede de gobierno comenzaron a llegar los representantes de las distintas entidades comprometidas en la mesa de diálogo. El primero fue el Gran Maestro de la Masonería de Chile, Jorge Carvajal, quien comentó que la información reunida por la institución "es sustantiva".

Luego María Luisa Sepúlveda, a quien Lagos designó para comparar toda la información recibida, trajo consigo el informe preparado por la Iglesia Católica.

Cerca de las 09:15 horas llegaron los representantes de las iglesias evangélicas: el obispo metodista pentecostal, Francisco Anabalón, y el obispo metodista de Chile Neftalí Aravena. Este último sostuvo que si bien los cuatro informes que entregaron al Presidente Lagos son de carácter general, en términos específicos no serían más de 13 ó 14 casos de desaparecidos los que se podrían determinar con claridad su paradero.

El representante de la comunidad judía, León Cohen, llegó con su informe que calificó de "importante". Fue el único personero que se mostró partidario de prorrogar el plazo, por seis meses más, el plazo para recabar información. "Aunque sea un caso,



El Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Jorge Carvajal, fue el primero en llegar a La Moneda a dejar los antecedentes recopilados por su institución.



El obispo evangélico, Neftalí Aravena, entregó su informe al Presidente Lagos pasadas las 9:15 horas.



El obispo castrense, Pablo Lizama, entregó la información de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.

serviría para mitigar el dolor", dijo.

Cerrando la jornada, a las 10 de la mañana, arribó el obispo castrense Pablo Lizama, quien en representación de las tres ramas de las FF.AA. y de Carabineros entregó al Jefe de Estado un informe conjunto y quizás el más esperado.

Consultado si las instituciones armadas estaban sa-

tisfechas con la información, el obispo Lizama comentó que "para algunos será muy bueno y para otros será malo. Lo importante es que este es el resultado de un esfuerzo muy serio y muy grande para responder al compromiso asumido en la mesa de diálogo". Se manifestó contrario a prorrogar el plazo de entrega de información, argumentando que las instituciones

castrenses "hicieron todo el esfuerzo necesario".

Paralelamente a lo que ocurría en La Moneda, el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Manuel Camilo Vial, informó que la Iglesia Católica entregó el Presidente Lagos 38 informes con datos individuales y colectivos, que recogen todos los antecedentes recibidos, excepto aquellos que se refieren a la identidad de los informantes.

La mayoría de los informes entregan antecedentes de carácter particular y masivo. Informó que de los masivos hay dos o tres de ellos en que se trataría de decenas de personas y no más que eso, cuya ubicación estaría en la zona central del país. La Iglesia señaló que por las características de los informes, ha sido imposible estimar la cifra de casos ni sus identidades.

Monseñor Vial estimó que, en general, hay algunos informes que podrían ser conducentes a la ubicación de restos de personas o al conocimiento de lo ocurrido

con ellas, pero sin calificar si se trata de detenidos desaparecidos o de otro tipo de situaciones ni de identificar a las víctimas.

En los informes, trascendió, vendrían crudas descripciones de cómo algunas víctimas fueron asesinadas y los medios que se usaron para hacer desaparecer sus cuerpos. También se describirían algunos lugares, como el océano y las altas cumbres, donde fueron arrojados los cuerpos.

Fuentes calificadas informaron que de los cerca de 400 casos que habrían entregado las instituciones armadas, unos 200 corresponderían a Carabineros, de los cuales, unos 20 habrían sido detenidos, ejecutados y sepultados clandestinamente, aportándose antecedentes que podrían conducir a ubicar sus restos. En unos 70

casos, Carabineros admitiría que las detuvo y entregó a otras instituciones armadas, fundamentalmente al Ejército. En poco más de 30 casos, la institución habría detenido y ejecutado, pero serían personas encontradas e identificadas. (Lonquén, Mulchén y Yumbel-Laja). Mientras que otras 70 están desaparecidas. A juicio del equipo que encabeza María Luisa Sepúlveda, que permaneció gran parte de la noche trabajando en La Moneda comparando las informaciones, es posible que un porcentaje de datos se repita y con ello se reduzca el cúmulo de antecedentes. No obstante, trascendió que de los cerca de 400 casos que recibió Lagos, entre un 15 y un 20% podría llegar a conocerse el destino final.



El secretario general de la Conferencia Episcopal, Manuel Camilo Vial, no llegó hasta palacio con el informe de la Iglesia Católica. Fue enviado a través de María Luisa Sepúlveda.

## AFDD: "Esto será terriblemente doloroso y triste"

Iván Carvajal / SANTIAGO

Como una "solución parche" calificó la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, la mesa de diálogo que integraron diferentes sectores y que ayer entregaron sus informes al Presidente Ricardo Lagos. Mientras la televisión daba cuenta ayer de lo que estaba ocurriendo en La Moneda con la entrega de información, los miembros de la AFDD seguían con notoria ansiedad las noticias.

Para García no se necesitaban seis meses para que se entreguen datos, porque las FF.AA. siempre los han tenido.

La dirigente indicó que si los antecedentes son útiles para la ubicación de desaparecidos, deben entregarse a los tribunales para que determinen mediante investigaciones las responsabilidades penales que caben.

En este sentido concuerda con la presidenta, Viviana Díaz, que reconoció su interés por los datos para analizarlos.

Mientras versiones extraoficiales dan cuenta de una recopilación parcial de datos,

García cree que la razón de ello son las últimas resoluciones judiciales, que han hecho a los militares no entregar toda la información "porque ésta sigue siendo la moneda de cambio que necesitan para asegurarse la impunidad".

"En 48 horas más vamos a saber algo de lo que pasó, una situación de mucha expectativa, de resurgimiento de la esperanza de encontrarlos, de mucha angustia", dijo García, para quien es complicado saber que una cantidad determinada de detenidos desaparecidos no los van a encontrar. "Va a ser una

situación terriblemente dolorosa y triste", admitió.

Después de ocho meses de gestión y desde que se creó la mesa de diálogo, la confianza entre la AFDD y los abogados de derechos humanos -entre ellos Héctor Salazar y Pamela Pereira- aún no se restablece; no obstante, la relación sigue debido a que algunos de ellos aún tienen procesos de detenidos desaparecidos en sus manos.

García y Díaz lamentan que con su presencia legitimaran una instancia que nunca debió crearse.